



Mérida, Yucatán, a veinticinco de abril de dos mil veinticuatro. -----

**VISTOS:** El oficio marcado con el número **INAIP/CP/DMIOTDP/224/2024**, de fecha veintidós de abril de dos mil veinticuatro, presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto día veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, a través del cual se hace del conocimiento del Pleno de este Órgano Garante, el acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, mediante el que se **determinó el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán**, al requerimiento que se le efectuare por acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, y por ende, a la definitiva de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión al rubro citado, mediante la cual se **revocó** la falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado en comento, recaída a la solicitud de acceso con número de folio **310578221000052**; esto en virtud que transcurrió el término de cinco días hábiles que se le concediere para tales efectos, sin que hubiere informado o remitido documental alguna a este Instituto a través de la cual acreditare el cumplimiento respectivo; por lo que, se **determinó hacer efectivo el apercibimiento establecido en el proveído de referencia, y en consecuencia, imponer y llevar a cabo las gestiones correspondientes para la aplicación y ejecución de la medida de apremio consistente en la AMONESTACIÓN PÚBLICA**, prevista en el artículo 201, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, a la **C. PAOLA SOCORRO CARRILLO BRICEÑO**, con el carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, y quien resultó ser la servidora pública responsable del incumplimiento a la definitiva dictada por la Máxima Autoridad de este Instituto, en el recurso de revisión marcado con el número de expediente **883/2021**; toda vez que si bien primeramente el incumplimiento versó en la omisión de una persona distinta, tal como se advierte del acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual se estableció que pese a que el Sujeto Obligado remitió diversa documentación con la cual pretendió solventar la definitiva materia de estudio, las gestiones realizadas no resultaron suficientes para cumplirla total y cabalmente, lo cierto es, que se nombró a una nueva Titular de la Unidad de Transparencia diferente del servidor público quien resultó responsable del incumplimiento con antelación; por lo que, a través del acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, se le concedió la oportunidad de realizar las gestiones correspondientes para solventar la definitiva materia de estudio; sin que al día del fenecimiento del plazo otorgado para tales efectos remitiere documental alguna con la cual demostrare dicho cumplimiento; consecuentemente, se puede determinar que la misma ha sido contumaz en el presente asunto, y por ende, resulta responsable del incumplimiento que nos ocupa, tal como quedare plasmado en el auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro. -----

- - - En mérito de lo antes expuesto, y acorde a las constancias y autos que conforman el expediente al rubro citado, **de los cuales en efecto se desprende el incumplimiento a la definitiva materia de estudio por parte de la C. PAOLA SOCORRO CARRILLO BRICEÑO**,



**Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán;** esto, en virtud que el incumplimiento en cuestión versó en la omisión de realizar lo siguiente: **“Requerir al Secretario Municipal, a fin que, en atención a sus atribuciones y funciones, realizare la búsqueda exhaustiva de la información inherente a: “Regularización vigente que supervise la ocupación del suelo en el área peatonal por parte de los comercios establecidos por los pobladores que se encuentran en el centro de Kanasín, Yucatán, y la vigencia de esta.”, y la entregare; o bien, de proceder a declarar la inexistencia de la información, fundare y motivare la misma adecuadamente, remitiéndola al Comité de Transparencia a fin que éste cumpla con lo previsto en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Criterio 02/2018, emitido por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; **Notificar al ciudadano** la respuesta recaída a la solicitud de acceso que nos ocupa, conforme a derecho corresponda, atendiendo a lo previsto en el artículo 125 de la Ley General de la Materia, y **Enviar al Pleno** de este Instituto las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la resolución materia de estudio.”;** siendo la mencionada Unidad de Transparencia la responsable de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que se le presenten, realizar los trámites internos necesarios para la atención de las mismas, efectuar las notificaciones a los solicitantes y entregar o negar la información solicitada, así como, es a través de la Unidad de Transparencia, que los sujetos obligados darán estricto cumplimiento a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión, debiendo informar al Instituto dicho cumplimiento; por lo tanto, resulta inconcuso que al radicar el incumplimiento a la definitiva materia de estudio, en la omisión de requerir al o a las Áreas que resultaren competentes de tener la información peticionada, de conformidad a las consideraciones plasmadas en la definitiva en cita, para efectos que diere respuesta a la solicitud de acceso, es decir, realizaren la búsqueda de la información y emitieren respuesta entregándola, o bien, declarando la inexistencia de la misma, cumpliendo el procedimiento previsto en la norma, notificar a la parte recurrente la contestación correspondiente conforme a derecho, e informar a este Instituto dichas circunstancias, **la servidora pública responsable es la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado al rubro citado**, pues no realizó lo conducente; máxime, que no obra en autos del presente expediente documental alguna con la cual se acredite que la Unidad de Transparencia realizó las gestiones correspondientes para acatar la definitiva que nos ocupa, y el incumplimiento resultare de la omisión por parte de alguna otra área del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán; en ese sentido, de conformidad a los ordinales, 42, fracción III, y 201, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos, 15, último párrafo, 87, fracción I, y 90, segundo párrafo, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y el artículo 9, fracción XXIX, del Reglamento Interior del Instituto, en vigor, el Pleno de este Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, considera procedente aplicar a la **C. PAOLA SOCORRO CARRILLO BRICEÑO, quien ocupa el cargo de Responsable de**

la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, tal como se advierte del acta de sesión de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, misma que fuera remitida a este Instituto el día veintisiete del propio mes y año, **la medida de apremio consistente en la AMONESTACIÓN PÚBLICA**, acorde a los términos que se señalan a continuación: - - - - -

- - - a) Atendiendo a lo dispuesto en el numeral 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en el cual se establecen los criterios de calificación para imponer las medidas de apremio, a saber: *I. La gravedad de la falta, II. Las condiciones económicas del infractor, y III. La reincidencia*; esta Máxima Autoridad, señala que en el presente asunto resulta conducente aplicar a la servidora pública responsable del incumplimiento a la definitiva dictada en el medio de impugnación que nos ocupa, la AMONESTACIÓN PÚBLICA prevista en la normatividad vigente, en virtud que no obstante respecto a **la gravedad de la falta**, el acto reclamado versó en una falta de respuesta a una solicitud de acceso, resultando que dicha situación persistía al momento de resolver el medio de impugnación de referencia, pues durante la sustanciación del mismo, el Sujeto Obligado no remitió documental alguna mediante la cual desvirtuare lo manifestado por la parte recurrente, y con la cual demostrare haber dado respuesta a la solicitud por la cual se radicare este expediente, o bien, intentare cesar los efectos del acto reclamado, emitiendo con posterioridad y en virtud del recurso de revisión, alguna respuesta; siendo que dicho supuesto es una clara forma de violación al derecho humano que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública gubernamental, que incluso se contempla como una causa de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General antes invocada; y por la que se ordenó dar vista al Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado de dicha circunstancia; por lo tanto, **incumplir totalmente** una resolución dictada en el recurso de revisión en el que se reclama dicho acto, significa persistir en la omisión de responder cabalmente una solicitud de acceso; lo cierto es, se debe tomar en consideración **en primera instancia**, que en vías de cumplimiento, el Sujeto Obligado intentó previo al requerimiento de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, solventar lo ordenado en la definitiva dictada en el presente expediente, enviando constancias de las cuales se observó que el oficio de requerimiento de información iba dirigido a un área administrativa distinta a la que de conformidad al Considerando Sexto de la propia resolución, resultó competente de tener en sus archivos la información que es del interés del ciudadano; documentación que fuere remitida de nueva cuenta, con posterioridad, pero con anterioridad a la designación de la nueva Responsable de la Unidad de Transparencia; y **en segunda**, que atendiendo al nombramiento que obra en los archivos de este Instituto, la Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento que nos ocupa, fue designada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que, se puede colegir que durante los periodos concedidos para cumplir los requerimientos que se le realizaron, se encontraba en el proceso de revisión y



adaptación de las obligaciones que tiene en ejercicio de su cargo, así como en materia de transparencia y acceso a la información pública, e incluso se encuentra capacitándose respecto a las atribuciones que el Ayuntamiento como sujeto obligado tiene frente a la sociedad con motivo de la legislación de la materia aplicable en el Estado; máxime, que el requerimiento que se le realizare para efectos de atender lo instruido por este Órgano Colegiado en el expediente de que se trata, se realizó unos días después de su designación, y la cantidad de asuntos pendientes por atender, mismos que obran en los archivos de este Instituto, es considerable; en ese sentido, y sin dejar de lado la atribución de este Organismo Autónomo, de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen las personas, se considera que independientemente de las **condiciones económicas** del infractor, dado a que en el presente asunto no resultan un supuesto a tratar, ya que la naturaleza de la medida de apremio consistente en la AMONESTACIÓN PÚBLICA, no tiene alguna afectación a la situación económica del servidor público, y en lo que se refiere a **la reincidencia**, pese a que previamente se impusieron diversas amonestaciones públicas y multas al Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento aludido, ésta fue implementada en años anteriores a las personas que en aquel entonces ocupaban el puesto en cuestión, es decir, a personas distintas a la C. Paola Socorro Carrillo Briceño, resultando que las medidas de apremio, siendo instrumentos procesales cuya finalidad al aplicarlas es hacer cumplir las determinaciones emitidas por el Pleno de este Instituto en los Recursos de Revisión, entre otros, son de tal naturaleza que se siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, pues no debe olvidarse que son los individuos quienes desempeñan los cargos de autoridad responsable, de tal modo que el incumplimiento a la resolución definitiva en este caso, no puede desvincularse de aquél que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental de cumplirle; siendo, que para ello resulta necesario establecer el nombre del servidor público que ocupa el puesto del área contumaz, esto en el momento de hacer efectivo el apercibimiento respectivo; consecuentemente, es indubitable que la persona que a la presente fecha resulta responsable del incumplimiento a la definitiva dictada en el presente expediente, y que es merecedora de la medida de apremio en cuestión, no ha sido reincidente en la conducta omisiva que se observa en el caso que nos ocupa, ya que no se le ha aplicado medida de apremio con antelación, respecto a la conducta advertida en el presente asunto; por lo tanto, este Órgano Colegiado considera pertinente que debe aplicarse la medida de apremio consistente en la AMONESTACIÓN PÚBLICA antes indicada, entendida como una llamada de atención, reprensión, advertencia o prevención a quien realiza una actividad anómala para hacer conciencia en él de ello, a efecto de que procure evitar la reiteración de una conducta constitutiva de una falta legal, es decir, el incumplimiento a una resolución dictada por la Máxima Autoridad de este Instituto, haciéndole ver las consecuencias de la conducta cometida,

exhortándole a la enmienda y conminándole con que se le impondrá una sanción mayor en caso de reincidencia o persistencia en su conducta anómala; máxime, que la Ley de la Materia no establece orden alguno, ni reglas de aplicación, que tuvieran que ser observadas en el ejercicio de la facultad discrecional de imponer una medida de apremio, considerándose que la única limitación existente para el organismo garante radica en el hecho de que al decidir el empleo de cualquiera de los medios que enumera dicho artículo, deberá expresar con claridad la motivación que tenga para ello; sírvase lo antes expuesto, como expresiones de la calificación de la medida de apremio aplicable en el presente asunto, acorde a los criterios dispuestos en la legislación local vigente; y - - - b) En cuanto a la aplicación y ejecución de la Amonestación Pública, de conformidad al artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, **por un lado, se tiene por aplicada en la sesión del Pleno** en la cual se aprueba la medida de que se trata y **se ejecutará por este Órgano Garante a través de una publicación que se realice de la referida Amonestación en el Sitio Oficial del Instituto, específicamente en la página inicial;** siendo, que dicha publicación deberá señalar que consiste en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, los datos de la servidora pública a quien se le impone, en la especie la Responsable de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, la fecha y los datos de la sesión en la cual se impone la misma, así como la expresión de los motivos por los cuales se aplica ésta, entre otros; **y por otro, se conmina al superior jerárquico de la servidora pública responsable del incumplimiento,** es decir, al Presidente Municipal del Ayuntamiento en comento, a fin que en un término no mayor a **CINCO DÍAS HÁBILES** efectúe la publicación de la AMONESTACIÓN PÚBLICA impuesta a la Responsable de la Unidad de Transparencia, a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento, o en su caso, en el medio de difusión público con el que cuente el sujeto obligado; para lo cual se le remitirá una copia de la misma a fin de poder acatar dicha instrucción; y una vez hecho lo anterior remita la documentación a través de la cual acredite la gestión respectiva, en un plazo que no podrá exceder de **VEINTICUATRO HORAS** siguientes a la publicación de referencia; no se omite manifestar, que para los efectos previstos en el ordinal 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, **se tendrá por ejecutada la medida de apremio la fecha en la cual este Instituto realice la publicación respectiva en su sitio Oficial,** para lo cual deberá levantarse constancia de dicho hecho, debiendo obrar ésta en el expediente. - - - - -

- - - Finalmente, con fundamento en el artículo 42, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el segundo párrafo del numeral Septuagésimo, y el diverso Septuagésimo Primero, ambos de los Lineamientos Generales para el Registro, Turnado, Sustanciación y Seguimiento a las Resoluciones de los Recursos de Revisión emitidas por el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los Sistemas de Gestión de Medios de



Impugnación y de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados, se ordena que las notificaciones a las partes se efectúen conforme a derecho; siendo que **en lo atinente al Sujeto Obligado, ésta se hará a través del correo electrónico registrado ante el Instituto, adjuntando una copia de la AMONESTACIÓN PÚBLICA para efectos de acatar lo indicado con antelación**, con fundamento en lo dispuesto en los numerales décimo cuarto, décimo quinto, primer párrafo, y sexagésimo noveno de los Lineamientos Generales antes invocados; y **en lo relativo al particular, se realizará a través del correo electrónico advertido en los autos del presente expediente**; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo, parte in fine, del numeral Décimo Segundo de los multicitados Lineamientos Generales. Cúmplase. Así lo acordaron y firman, conforme los artículos y ordenamientos antes citados, únicamente la Maestra, María Gilda Segovia Chab y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionado, respectivamente, del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en tanto se realiza la designación y tome protesta en términos de la normatividad aplicable el nuevo Comisionado o Comisionada que cubrirá la vacante del Pleno del Instituto, con motivo de la conclusión del mandato de quien ocupara previamente el cargo, esto a fin que se garantice el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, la institucionalidad, la regularidad y la continuidad del funcionamiento de este Instituto, así como lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades sustantivas del Órgano Colegiado de este Instituto y así garantizar el derecho de toda persona de recibir justicia de manera pronta, expedita, completa e imparcial, en sesión del día veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, con fundamento en los artículos 31 y 33, del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. -----



MTRA. MARIA GILDA SEGOVIA CHAB  
COMISIONADA PRESIDENTA



DR. CARLOS FERNANDO PAVÓN DURÁN  
COMISIONADO